

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL
JUZGADO DEL TRABAJO III

ACTUACIONES N°: 498/20



H103034252654

**JUICIO: PACHECO BARROS MACARENA BELEN c/ CARMENA
MARCELO RAMON Y LESCANO ALICIA DEL VALLE s/ COBRO DE
PESOS. Expte. N° 498/20.**

San Miguel de Tucumán, 22 de febrero de 2023.

REFERENCIA: Para dictar sentencia definitiva en el expediente caratulado “Pacheco Barros, Macarena vs. Carmena Marcelo Ramon Y Lescano Alicia del Valle S/Cobro de Pesos”, tramitados ante este Juzgado del Trabajo de la III Nom.

ANTECEDENTES

Se apersonó el letrado César Eduardo Luna González en representación de la accionante Macarena Belén Pacheco Barros, DNI N° 40.434.750, con domicilio en Pje. Álvarez Thomas n° 2353, de esta ciudad, conforme lo acreditó con poder *ad litem* (poder especial gratuito para este juicio) que agregó en formato digital.

En tal carácter promovió demanda en contra de Marcelo Ramón Carmena, DNI n° 20.247.325, con domicilio en Av. Juan B. Justo n° 960, de esta ciudad y contra Alicia del Valle Lescano, DNI n° 24.987.050, con domicilio en calle Laprida n° 213, de esta ciudad, por el cobro de la suma de \$1.244.573,30 (pesos un millón doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y tres con 30/100) en concepto de cobro de indemnización por despido indirecto con más multas de Ley.

Afirmo que ingresó a trabajar para la demandada el 01/09/2017 en el local de calle Laprida n° 213, bajo dependencia directa del Sr. Carmena, de quien afirmó que era un reconocido comerciante de la ciudad, propietario de varios Kioscos. Denunció que fue el quien impartía órdenes de manera personal o a través de otros de sus dependientes, en particular Andrea Viviana Sánchez, quien fue encargada de administrar y gestionar los Pago Fácil en los distintos puntos de venta de propiedad del demandado.

Destacó que sus recibos de sueldo figuraban a nombre de Alicia del Valle Lescano, en fraude laboral que denunció en relación a los demandados.

Denunció jornada laboral de lunes viernes de 08.00 a 14.00 hs y de 17.00 a 21.00 horas y los sábado en igual jornada con finalización a las 20.00 hs.

Agregó que percibía como remuneración mensual de \$14.000, al mes de marzo de 2020, aunque consideró que debió percibir la suma de \$40.559,38 según convenio colectivo y de acuerdo a su categoría y jornada (Cajera B, de jornada completa).

Denunció que sus tareas consistían en prestar servicios como cajera del Pago Fácil ubicado en el kiosco de calle Laprida n° 213, de esta ciudad.

Alegó que consignaron su ingreso el 20/06/2018 en la categoría de vendedora B de media jornada.

Respecto del distracto, relató que el día 07/05/2020 el accionado Carmena dejó de brindarle tareas a la accionante por lo que remitió TCL el 11/05/2020 dirigido a ambos demandados, solicitando se aclare su situación laboral, brinde ocupación efectiva, bajo apercibimiento de considerarse despedida. Intimó asimismo, a la correcta registración de acuerdo a las condiciones laborales que denunció.

Destacó que a la demandada Lescano, la intimó en iguales términos en su carácter de responsable solidaria.

Afirmó que envió un nuevo TCL (14/05/2020) a la Sra. Lescano, atento la anterior le fue devuelta con la aclaración de “se mudó” por la que se dio por despedida y reclamó las indemnizaciones de ley. Agregó que nuevamente fue devuelta al remitente por el Correo.

Alegó que el demandado Carmena respondió a su intimación mediante CD del 13/05/2020, por la que negó los hechos denunciados por la accionante y asimismo negó la relación laboral en base a los términos que transcribió.

Finalmente, afirmó que mediante TCL del 15/05/2020 se dio por despedida ante la negativa de relación laboral por parte del Sr. Carmena, reclamando las indemnizaciones de Ley.

Denunció la responsabilidad solidaria de la codemandada Alicia del Valle Lescano, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 29 LCT. Alegó que el Sr. Carmena se proveía a través de la demandada de trabajadores para la realización de distintas tareas en sus establecimientos

comerciales, cuando consideró a este como único y real empleador. Denunció fraude laboral por la utilización de una prestanombres con la intención de eludir sus responsabilidades patronales.

Reiteró que la accionante recibía órdenes directas del Sr. Carmena o de Andrea Viviana Sánchez, dependiente de aquel. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

Efectuó planilla indemnizatoria provisoria agregó documentación original que dio cuenta el cargo digital del 20/07/2020.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el 08/09/2020, el demandado Marcelo Ramón Carmena, con la representación letrada de Sebastián Giudice, conforme lo acreditó con poder general para juicios que agregó en formato digital.

Dedujo excepción de falta de acción, en tanto consideró que la misma accionante reconoció no haber prestado servicios para el demandado y que, en cambio, su empleadora fue exclusivamente la Sra. Alicia Lescano, a quien reconoció como explotadora de un kiosco dentro de la ciudad en el carácter de franquiciada de su mandante, conforme contrato de Franquicia Mercantil registrado en la Dirección General de Rentas, que ofreció como prueba.

Agregó que en su carácter de franquiciante, le proveía a la codemandada de ciertos artículos para la explotación del kiosco a la verdadera empleadora de la actora, la Sra. Lescano.

Consideró que el hecho de que la Sra. Lescano explote un kiosco a su nombre, con sus propios empleados y obligaciones, haciendo uso de una marca y un proveedor (franquiciante) no convierte a la accionante en empleada de su mandante.

En subsidio, contestó demanda y efectuó una negativa general y particular de los hechos denunciados en la demanda y, en consecuencia, dio su versión de los mismos.

Afirmó que la verdad de los hechos es que su mandante se dedica a la compra venta de golosinas en forma mayorista y minorista y explota algunos kioscos dentro de la provincia.

Negó relación de tipo laboral con la actora.

Destacó que de acuerdo con su actividad, el demandado tiene una gran cantidad de clientes en la provincia a los cuales les provee de mercadería y que algunos de ellos aprovechan el reconocido nombre de la marca del demandado y los terceros lo utilizan explotando sus propios kioscos mediante un sistema de franquicias.

Agregó que esos terceros son ajenos al demandado y que sus explotaciones por medio de franquicias lo hacen por su cuenta y riesgo, para lo cual contratan a sus propios empleados y obligaciones por las que no debe responder.

Afirmó que el 10/11/2014 firmó un contrato de franquicia mercantil, debidamente sellado por la DGR y con las firmas certificadas por escribano público, con la Sra. Lescano para que explotara un kiosco en calle Laprida n° 213, en los términos de aquel contrato.

Como consecuencia de aquello, destacó determinadas facturas correspondientes a compras efectuadas que dieron cuenta de las diversas operaciones efectuadas por la codemandada para obtener mercadería que distribuye y comercializa y que detalló en su responde.

Consideró que la actora incurrió en numerosas contradicciones que ponen de resalto la improcedencia de la demanda en su contra. Entre ellas, reconoció en su demanda que prestó servicios en calle Laprida n° 213, pero que luego intimó al demandado en un domicilio distinto.

Sostuvo que la accionante hizo una incorrecta aplicación del art. 29 LCT, el que consideró improcedente.

Impugnó la planilla indemnizatoria presentada y agregó documentación original que dio cuenta e cargo del 28/09/2020.

Mediante providencia del 20/04/2021 se tiene por incontestada la demanda por parte de la codemandada Alicia del Valle Lescano.

El 11/05/2021 se abrió la causa a pruebas al solo fin de su ofrecimiento, ofreciendo las partes aquellas que dan cuenta el informe del (02/06/2021).

El 09/09/2021 se llevó a cabo la audiencia de conciliación prevista por el art. 69 CPL, la que se tuvo por intentada y fracasada, atento a la incomparecencia de ambos demandados, por lo que se procedió a proveer las pruebas ofrecidas.

Secretaría Actuarial informó sobre las pruebas producidas el 28/06/2022.

Mediante providencia del 25/08/2022 se agregaron los alegatos de la actora y el demandado Carmena, por su orden. La codemandada Lescano, no presentó alegatos.

Finalmente, por proveído del 23/11/2022, se llamaron los autos a despacho para resolver sentencia definitiva, la que notificada y firme, deja la causa en estado de ser resuelta.

ANÁLISIS DEL CASO Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA

Respecto a la documentación presentada por la actora, el demandado Carmena reconoció la autenticidad del intercambio epistolar ocurrido con su parte. Cabe recordar aquí que el art. 88 del CPL prescribe que: *“Las partes deberán reconocer o negar categóricamente los documentos que se les atribuyen y la recepción de las cartas, telegramas y facsímiles que les hubieran dirigido. El incumplimiento de esta norma determinará que se tenga por reconocidos o recibidos tales documentos...”* Por ello, considero que el demandado cumplió con lo dispuesto en el artículo de referencia, debiendo tener por desconocida tal documentación. Así lo declaro.

Respecto de la codemandada Lescano, la misma no contestó demanda (conforme providencia del 20/04/2021), por lo que no efectuó una negativa de la documentación que se le atribuye, teniéndose por auténtica y recepcionada aquella, en virtud de lo dispuesto por el art. 88 y 58 CPL. Así lo declaro.

En relación con la documentación agregada por el demandado Carmena, esta consistió en un contrato de franquicia y facturas tipo “B” que no le fueron atribuidas a la accionante, por lo que no corresponde efectuar a su respecto el análisis del cumplimiento del art. 88 CPL, en tanto no cumple con los parámetros establecidos en la normativa mencionada. Así lo declaro.

En consecuencia, las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria sobre las que debo pronunciarme, conforme el art. 214 inc. 5 del CPCYC supletorio son las siguientes: 1. Existencia de relación laboral entre las partes. Excepción de falta de acción deducida por Marcelo Carmena 2. Dado el caso, características de la relación laboral: 2.1 Fecha de ingreso, 2.2 tareas y categoría, 2.3 jornada y 2.4 remuneración. 3. Acto, fecha, causal y justificación del distracto. Responsabilidad solidaria del art. 29 LCT respecto de la codemandada Lescano. 4. Procedencia de los rubros e importes reclamados.

Se tratan a continuación y por separado cada una de las cuestiones litigiosas, poniendo de resalto que, por imperio del principio de relevancia, el Juez analizará únicamente aquellas probanzas que considere conducente para la resolución de la causa.

Primera Cuestión

Existencia de la relación laboral. Excepción de falta de acción deducida por Marcelo Carmena.

En el análisis de la naturaleza jurídica del vínculo que unió al actor con la demandada cabe considerar que el art. 21 LCT establece que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios, a favor de otra y bajo la dependencia de esta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración, y que sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuera de tales y los usos y costumbres.

Asimismo, el art. 22 define la relación de trabajo, siendo la nota tipificante de ésta la ejecución de los actos, de la obra o la prestación del servicio por parte de una persona bajo la dependencia de otra en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le de origen.

Concordantemente, el art. 23 LCT dispone que la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Es decir, la prestación de servicios de la que habla el art. 23 remite a la relación de trabajo dependiente del art. 22 LCT, que a su vez, probada, hace presumir el contrato de trabajo que define el art. 21.

Por lo tanto, si quien afirma la existencia del hecho, es el que debe probarlo, también está a su cargo acreditar su carácter laboral cuando no surge evidente por sí mismo (normalmente así ocurre en la gran parte de los casos) y ha sido negado (*cfr. Vázquez Vialard, t. 3, pág. 426/437*).

Entonces, del análisis de las posturas de las partes surge que la accionante denuncia que su verdadero empleador fue Marcelo Carmena, mientras que la codemandada Lescano hacía las veces de “prestanombre” (sic) de aquel.

Carmena por su parte, niega toda relación laboral con la actora y manifiesta que se vincula con la codemandada por medio de un contrato de franquicia que no le cabe ninguna responsabilidad por los eventuales empleados que aquella hubiera decidido contratar, en

tanto dichas obligaciones las asumió a su propio riesgo, por lo que planteo excepción de falta de acción.

La codemandada, como se dijo, no respondió demanda y por lo tanto no dio su versión de los hechos tratados en esta cuestión.

Sobre el particular, el art. 60 CPL dispone que el demandado deberá reconocer o negar los hechos en los que se funda la demanda, siendo su silencio o respuestas evasivas interpretadas como reconocimiento. Además deberá proporcionar su versión de los hechos bajo apercibimiento de tenerlo por conforme con los invocados en la demanda a pesar de su negativa.

La codemandada, como se dijo, no respondió demanda y por lo tanto no dio su versión de los hechos tratados en esta cuestión.

Sobre el particular, el art. 60 CPL dispone que el demandado deberá reconocer o negar los hechos en los que se funda la demanda, siendo su silencio o respuestas evasivas interpretadas como reconocimiento. Además deberá proporcionar su versión de los hechos bajo apercibimiento de tenerlo por conforme con los invocados en la demanda a pesar de su negativa.

No obstante, Altamira Gigena sostiene que *"toda presunción dependerá de las pruebas que las partes aporten para que tenga eficacia. No se aplica de pleno derecho, sino que debe estar bien acompañada, avalada de pruebas que la ratifiquen, o desvirtú en. La presunción provoca la inversión de la carga probatoria"* (autor citado, "Ley de Contrato de Trabajo", Editorial Astrea, Bs.As. 1981, T° I, pág. 345).

Asimismo, el art. 58 CPL establece que: *"En caso de incontestación se presumirán como ciertos los hechos invocados y como auténticos y recepcionados los documentos acompañados a la demanda, salvo prueba en contrario. Esta presunción procederá si el trabajador acreditare la prestación de servicios"*.

Considero que la relación laboral entre la Sra. Pacheco Barros y la codemandada Lescano, se encuentra acreditada y, por lo tanto, corresponde hacer efectivos los apercibimientos de los arts. 60 y 58 CPL mencionados, en virtud de los recibos de sueldo agregados por la accionante, declarados auténticos en virtud del art. 88 CPL. Tales recibos se encuentran registrados a nombre de la codemandada Alicia del Valle Lescano, con domicilio en calle Laprida n° 213 por la "venta al por menor en

kioscos”, suscripto en la parte final y con sello a su nombre.

Por otro lado, mediante contestación de Afip del 25/10/2021, se informa respecto del registro de aportes de la seguridad social de la actora Pacheco Barros por los periodos de junio 2018 a mayo 2021 todos a nombre de la codemandada Lescano. Asimismo, informa sobre el registro de altas y bajas en el que figura la codemandada (su CUIT) desde junio 2018.

De forma concordante, Afip informó en el cuaderno informativo del demandado nº 2, del 26/10/2021 que aquella registró su domicilio fiscal en calle Laprida nº 213 para la actividad de “venta al por menor en Kioscos, Polirrubros y comercios no especializados” y “servicios de locutorios”.

Tal actividad también fue registrada en la Dirección General de Rentas, conforme informe del 28/09/2021 (CPD nº 3).

En consecuencia, del análisis integral de la prueba, surge con meridiana claridad que la demandada Lescano efectivamente fue empleadora de la accionante, en tanto la relación laboral se encontraba registrada a su nombre. Así lo declaro.

Ahora bien, la Sra. Pacheco Barros denunció que su verdadero empleador fue el demandado Carmena.

De la prueba producida y conducente para resolver la presente cuestión, surge que el 12/05/2022 se presentaron los testigos Micaela Noely Gramajo y Lucas Esteban Navarro.

Así, la primera testigo, declaró: *“Si lo conozco al Sr Marcelo Ramón Carmena, una vez fui a pagar y estaba fila y vi un hombre que se dirigía a Macarena y a otras señoras que estaban también en la atención del drugstore dando órdenes”; “Yo supongo que recibía órdenes del Sr Carmena porque varias veces que yo fui lo encontré al hombre ahí”* (respuestas 3º y 6º). Luego al responder las preguntas aclaratorias, en particular, si conocía el vínculo entre ambos demandados afirma: *“yo no sé si había un vínculo comercial, pero yo veía que él era el que dirigía y daba órdenes. Lo sé porque lo veía cuando hacía filas para pagar mis deudas, frecuentaba mucho el pago fácil, porque me quedaba de pasada de donde yo vivía”*.

Al preguntarle, posteriormente, respecto de la pregunta anterior, cómo sabía que “ese” hombre era el demandado Carmena, respondió: *“una vez cuando yo fui al pago facil, le pregunte a Macarena quién era el hombre; porque yo lo veía de vez en cuando ahí, y ella me*

contesto que era el jefe de Macarena y de Alicia”.

Por su parte, el testigo Lucas Esteban Navarro, declaró no conocer al demandado.

Mediante presentación del 19/05/2022, el demandado tacha a ambos testigos en su persona y sus dichos.

En relación con la testigo Micaela Gramajo, sostiene que se trató de una testigo de favor, preparada por la parte actora. Afirma que se contradice cuando declaró que vio al Sr. Carmena “*una vez*” cuando fue a pagar al Rapi Pago y luego en su respuesta sexta afirmó que lo hizo “*varias veces*”. Alega que en su respuesta siete afirmó que “*supone*” determinado hecho, por lo que consideró que no tiene certezas de haber percibido lo que relata. Finalmente, alega que al preguntarle cómo sabía que el Sr. Carmena daba órdenes a la actora, respondió que le preguntó a Macarena y ella le comentó que era su jefe.

Respecto del testigo Navarro, afirma que se contradice con la testigo anterior al declarar que conoció a la actora por trabajar en frente del lugar de trabajo de esta, pero que no conoce al Sr. Carmena. Afirma que se contradice al declarar que conoció a la actora “del kiosco del frente” porque también era empleada y luego afirmó que conoció donde trabajó porque iba constantemente a pagar las facturas a ese kiosco. Finalmente, alega que se contradice el testigo en cuanto a sus horarios de trabajo con los horarios declarados por la misma actora en su demanda.

Corrido el traslado de la presente incidencia, la parte actora respondió el mismo, solicitando su rechazo en virtud de los argumentos que allí explicó.

Del análisis de las tachas formuladas, considero que corresponde rechazar las mismas en tanto las declaraciones de los testigos no se advierten contradictorias en el sentido expuesto por el impugnante.

Las declaraciones se advierten coherentes, de acuerdo con lo que cada uno pudo percibir con sus sentidos y desde el lugar en que pudieron percibirlos, por lo tanto, las suposiciones o la falta de seguridad en sus declaraciones, refieren a la cercanía que objetivamente pudieron tener con los hechos que relataron y no implica que los testigos fueran mendaces.

En consecuencia, corresponde rechazar la tacha interpuesta en contra de los dos testigos, por falta de fundamentos y prueba por parte del impugnante. Así lo declaro.

Ahora bien, no obstante el rechazo a la tacha referida, considero que las pruebas producidas no son suficientes para determinar que el Sr. Carmena hubiera actuado en la realidad como verdadero empleador de la accionante. La declaración de la única testigo, no brinda certeza respecto del lugar o cargo que ocupaba el demandado en el kiosco.

Por el contrario, de la documental traída por el Sr. Carmena surge el Contrato de Franquicia emitido el 20/11/2014, que vincula a ambos demandados, suscripto por ellos respecto del kiosco “Mc Kio” que se desempeñará en el domicilio de calle Laprida nº 213, de esta ciudad, para comercializar productos de kiosco y prestar los servicios adicionales (de pago, cabina telefónica, etc.) con las condiciones dispuestas en sus cláusulas.

En particular, la cláusula decimonovena, refiere a la responsabilidad por las obligaciones laborales, en la cual dejan expresamente asentado que se tratan de empresas independientes y que cada uno de los contratantes tendrá la plena responsabilidad de la conducción de sus negocios y del personal que tuvieran a su cargo.

Asimismo, agregó facturas emitidas por el Sr. Carmena Marcelo Ramón a nombre de la demandada Lescano Alicia del Valle, por productos surtidos típicos de kioscos, entre ellos, golosinas, chocolates, gaseosas etc. por los periodos de abril 2019 a febrero 2020.

Las restantes pruebas resultan inconducentes para resolver la presente cuestión.

En relación con la responsabilidad derivada del contrato de franquicia, tiene dicho la jurisprudencia, a la que adhiero, que: *“El franquiciante le otorga por escrito el derecho de uso de un sistema de negocios cuyo objeto es proporcionarle una oportunidad de duplicar el negocio del franquiciante, quien por ley no puede participar, ni directa o indirectamente, en el control del capital del franquiciado. El franquiciado paga por la inversión de todos los activos, maquinarias o instalaciones que debe utilizar y además por el know how que recibe, la utilización de la marca y la asistencia técnica. Todo lo cual ingresa a su patrimonio, como bienes tangibles o intangibles, aunque algunos son temporales.*

Pone capital propio y es dueño de sus máquinas, patrón de sus empleados, titular del fondo de comercio y de sus instalaciones. No es empleado del franquiciante; tampoco es socio del franquiciante, quien no tiene ningún derecho a las utilidades del negocio del

franquiciado; ni tampoco el franquiciado es un representante, ni obliga al franquiciante ni éste responde por sus deudas” (Franchising. Su estancamiento y solidaridad laboral, 10 años después Autor: Marzorati, Osvaldo J. Publicado en: LA LEY 12/02/2019, 12/02/2019, 1 - LA LEY2019-A, 793, pág. 2).

No nos encontramos ante la existencia de una unidad técnica de ejecución, sino de un contrato en donde el franquiciante no tiene interés financiero en el negocio del franquiciado, sea éste en forma de sociedad o sea un emprendimiento unipersonal. El franquiciante no le cede ningún negocio propio de franquicia, sino que le otorga el derecho al uso de un método para duplicar un negocio probado, sin garantía de riesgo y es aquí donde debe ser eximido de responsabilidad por no tener la obligación de controlar a los empleados de su franquiciado. La consecuencia de esta independencia económica y jurídica es que el franquiciante no responde por la operación de las franquicias, no responde por las deudas comerciales, ni por las deudas laborales, impositivas o de ninguna otra índole de la franquicia.

En el fallo "Rodríguez c. Compañía Embotelladora y otro" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación agregó que "los contratos de concesión, distribución o franquicia permiten la vinculación de un empresario que suministra un producto, desligándose de su elaboración y distribución". Esta finalidad económica se frustraría si el derecho aplicable responsabilizara sin más a los concedentes por las deudas laborales de las concesionarias, con perjuicio para la economía nacional por las indudables repercusiones que ello tendría en las inversiones en contratos de este tipo” (Cámara Del Trabajo - Sala 4. “Morales Silvana Del Valle Vs. Iramain Rosa Cristina y Albertus Daniel Omar S/ Cobro De Pesos”. Nro. Expte: 1361/17. Nro. Sent: 47 Fecha Sentencia 06/04/2022).

En consecuencia, en mérito a las pruebas analizadas y la jurisprudencia citada, considero que la accionante no logró acreditar el vínculo de tipo laboral que la unía con el demandado Marcelo Carmena, por el contrario, se probó en esta causa que ambos demandados tenían un vínculo comercial por el que aquel no debe responder en cuanto a obligaciones laborales se refiere, por lo que corresponde HACER LUGAR a la excepción de Falta de Acción deducida por Marcelo Carmena, en su mérito, RECHAZAR la demanda interpuesta en su contra por la Sra. Macarena Pacheco Barros. Así lo declaro.

Segunda Cuestión

Determinada la existencia de la relación laboral con la Sra. Alicia del Valle Lescano, corresponde decidir respecto de las características de la misma: 1. Fecha de ingreso; 2. tareas y categoría aplicable; 3. jornada de trabajo y 4. remuneración.

Así, la actora afirma que ingresó en 01/09/2017 en el local de calle Laprida nº 213, con jornada laboral de lunes viernes de 08.00 a 14.00 hs y de 17.00 a 21.00 horas y los sábado en igual jornada con finalización a las 20.00hs.

Agrega que percibía como remuneración mensual de \$14.000, al mes de marzo de 2020, aunque consideró que debió percibir la suma de \$40.559,38 según convenio colectivo y de acuerdo a su categoría y jornada (Cajera B, de jornada completa). Denuncia que sus tareas consistían en prestar servicios como cajera del Pago Fácil. Alega que consignaron su ingreso el 20/06/2018 en la categoría de vendedora B de media jornada.

La demandada por su parte, no contestó demanda (decreto del 20/04/2021), por lo que no brinda su versión sobre los hechos denunciados por la parte actora.

Sobre el particular, como se dijo en la cuestión precedente, el art. 58 CPL, en sus partes pertinentes establece que: *“En caso de incontestación se presumirán como ciertos los hechos invocados y como auténticos y recepcionados los documentos acompañados a la demanda, salvo prueba en contrario. Esta presunción procederá si el trabajador acreditar la prestación de servicios”*.

En consecuencia, probada que fuera la relación laboral con la demandada, corresponde hacer efectivo el apercibimiento y en su mérito tener por ciertos las condiciones laborales denunciadas en la demanda y descriptos en el párrafo anterior. Así lo declaro.

Tercera Cuestión

3. Acto, fecha, causal y justificación del distracto. Responsabilidad solidaria del art. 29 LCT respecto de la codemandada Lescano.

Respecto del distracto, la accionante relató que el día 07/05/2020 el Sr. Carmena dejó de brindarle tareas por lo que remitió TCL de fecha 11/05/2020 dirigido a ambos demandados, solicitando se aclare su situación laboral, brinde ocupación efectiva, bajo apercibimiento de considerarse despedida. Intimó asimismo, a la correcta registración de

acuerdo a las condiciones laborales que denunció.

Destaca que envió un nuevo TCL (14/05/2020) a la Sra. Lescano, atento la anterior le fue devuelta con la aclaración de “se mudó” por la que se dio por despedida y reclamó las indemnizaciones de ley. Agregó que nuevamente fue devuelta al remitente por el Correo.

Finalmente, afirma que el demandado Carmena respondió a su intimación mediante CD del 13/05/2020, por la que negó los hechos denunciados por la accionante y asimismo negó la relación laboral en base a los términos que transcribió, por lo que mediante TCL del 15/05/2020 se dio por despedida ante la negativa de relación laboral, reclamando las indemnizaciones de Ley.

De acuerdo al relato de la actora, ésta intimó a que se aclare su relación laboral y se la registre de forma adecuada a ambos demandados. Habiendo declarado en la primera cuestión que el vínculo laboral se desarrolló únicamente con la Sra. Lescano, corresponde analizar el distracto respecto de ella.

En primer lugar, cabe destacar que en las misivas remitidas a la empleadora co demandada, se transcribieron las intimaciones efectuadas al Sr. Carmena. No obstante, esta expresamente consignó en las mismas que intimaba a la destinataria en idénticos términos y contenidos.

Así, la accionante denuncia en su demanda que intimó a su empleadora en el domicilio laboral (Laprida n° 213) para que le provean de ocupación efectiva y registren correctamente su relación laboral. De acuerdo al informe del Correo Oficial del 22/11/2022, tal TCL fue devuelto al remitente con la observación “se mudó”, entregada el día 13/05/2020.

Posteriormente, agregó el TCL de despido, fechado en 14/05/2020, el cual afirma que volvió al remitente, conforme así también lo informa el Correo.

Ahora bien, la Jurisprudencia ha entendido que si bien quien elige un medio de comunicación es responsable de que el mismo llegue a destino, ello es así siempre que no sea imputable al destinatario la causa que impide la efectividad del medio empleado. Así, si la noticia no llegó a cumplir su cometido porque “se mudó”, si el consignado era el real del destinatario, ya que en tal caso la no recepción resulta de un hecho atribuible a la negligencia de éste y cabe tener por cumplida la

notificación (Cfr. CNAT, sala III, agosto 16 -995, citado por Fernández Madrid, Juan Carlos y Fernández Madrid, Diego Injurias Indemnizaciones y multas laborales, Ed. La Ley, p. 58).

Entiendo que, si bien el telegrama de despido no fue recibido por la demandada, entró en la esfera de su conocimiento al haber sido enviado al domicilio donde trabajaba el actor, y que figura en los recibos de sueldo así como en toda la documentación impositiva de la demandada, siendo ella quien debe cargar con las consecuencias de la falta de recepción o en su caso, de la falta de denuncia de un nuevo domicilio.

Por lo expuesto, considero que el vínculo se extinguió por despido indirecto el día 14/05/2020, es decir, en la fecha de su imposición, atento que no se surge de la prueba informativa la de su recepción efectiva. Así lo declaro.

Determinado el distracto, corresponde entonces analizar su justificación a la luz de los arts. 242 y 243 LCT.

Así la actora se consideró despedida, según los términos de su misiva del 14/05/2020 ante la negativa de su destinatario a recepcionar y atender a los reclamos efectuados en su anterior telegrama (11/05/2020).

No existen constancias en el expediente de la respuesta otorgada por la demandada intimada, en tanto ésta, no agregó copia de su respuesta ni así lo acreditó por prueba alguna, correspondiéndole la carga de la prueba, en virtud del art. 322 CPCYC.

En nuestro sistema legal, reviste importancia el intercambio epistolar, ya que la intención legislativa descansa en la pretensión de otorgar certeza a las posiciones que las partes asuman en sus respectivas comunicaciones.

“El silencio opuesto por la demandada al emplazamiento del trabajador constituye un incumplimiento al deber de buena fe (art. 63 LCT) que se deben recíprocamente las partes en un contrato de trabajo. Cabe señalar que el propio art. 57 LCT impone al empleador la carga de explicarse cuando es intimado por el trabajador en cuestiones relativas al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, sea al tiempo de celebración, ejecución, suspensión, reanudación, extinción o cualquier otra circunstancia que creen, modifiquen o extingan derechos derivados del mismo” (Cfr., CNATrab., sala VI, 23/8/90, “Peroni, O. c/Tiro Federal Argentino de Buenos Aires”, DT, 1991-a-830).

El silencio guardado por el principal ante un requerimiento relativo al cumplimiento o incumplimiento de un debito fundamental, constituye una injuria de gravedad tal que justifica el despido indirecto (artículos 57, 62, 63, 242, 246 y cctes de la LCT). Se trata de una norma fundada en el principio de buena fe (art. 63 LCT), con lo que se busca la certeza en la relaciones laborales y facilitarle al trabajador la prueba de ciertos hechos” (Jorge Rodríguez Mancini, “Ley De Contrato de Trabajo”, comentada, p 289, comentario Art. 57, ed. “La Ley”, Bs.As. 2008).

En mérito a ello, considero que el despido indirecto efectuado por la accionante fue ajustado a derecho y se encuentra justificado, en tanto quedó acreditado de los términos de sus reclamaciones que hizo extensiva las intimaciones dirigidas al Sr. Carmena también a la Sra. Lescano y esta incurrió en silencio, debiendo cargar la demandada con su responsabilidad indemnizatoria. Así lo declaro.

Cabe destacar que la accionante denunció la responsabilidad solidaria de la demandada en virtud de lo dispuesto por el art. 29 LCT de acuerdo a lo declarado en la primera cuestión, en relación a la verdadera empleadora de aquella, la presente cuestión deviene de abstracto pronunciamiento. Así lo declaro.

Cuarta Cuestión

Procedencia de los rubros e importes reclamados.

Pretende la actora el pago de la suma de \$1.244.573,30 por el concepto de indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva por preaviso, Integración mes de despido, proporcional de mayo 2020, vacaciones, SAC proporcional, SAC s/ preaviso, SAC s/ vacaciones, Multa del arts. 1 y 2 Ley 25323, Art. 80 LCT, DNU 34/2019, diferencias salariales por los periodos de mayo 2018 a abril 2020.

Conforme el Art. 214, inciso 6 del CPCYC (supl.) se analizará cada concepto pretendido por separado.

1. Indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva por preaviso, Integración mes de despido, SAC s/ preaviso: Habiendo declarado que el distracto se produjo el 14/05/2020, los rubros reclamados pueden prosperar en virtud de lo dispuesto por los arts. 232, 233 y 245 de la LCT. En relación con el art. 233, el rubro procede por los 16 días restantes, al haberse producido el distracto en una fecha distinta del último día del mes. Así lo declaro.

2. SAC proporcional, Vacaciones y SAC s/ vacaciones: Habiendo ocurrido el despido el día 14/05/2020 corresponde abonar los rubros salariales reclamados, por no encontrarse acreditado su pago. Se rechaza en cambio, el SAC sobre las vacaciones proporcionales, ya que la indemnización por vacaciones no gozadas no es un salario, por lo tanto no genera sueldo anual complementario (conforme lo expresado también por la CNAT, Sala X, en sentencia n° 14.283, 25/04/06, “Candura, Claudio Roberto c/ Dellvder Travel SA y otro s/despidos”; CNATrab., Sala IX, 9/11/98, “Migueles...”, DT 1999-A-852). Así lo declaro.

3. Proporcional de mayo 2020: Corresponde a la demandada Lescano abonar los días trabajados del mes de mayo 2020, por no acreditar su cancelación. Así lo declaro.

4. Arts. 1 y 2 Ley 25323: De conformidad a lo establecido por la jurisprudencia, el deficiente registro laboral debe referirse exclusivamente a las situaciones contempladas en los Arts. 7, 8 y 10 de la Ley 24013, lo que se da en el caso de autos.

En efecto, la armónica interpretación de los artículos 7, 8, 9 y 10 de la Ley 24013 y el artículo 1 de la Ley 25323, exige limitar el ámbito de aplicación de éste último a los casos explícitamente descriptos en la Ley 24013, es decir, a) cuando la falta de registro fuera total, b) cuando la falta de registración involucre una pos datación de la fecha de ingreso y, c) cuando la falta de registro implique que se hubiera consignado en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador.

En consecuencia, habiendo declarado que la real fecha de ingreso de la actora ocurrió el 01/09/2017, mientras que de los recibos de sueldo surge su registración a partir del 20/06/2018, resulta de aplicación el apartado b) de la ley referida atento que existió una posdatación de la fecha de ingreso, en el sentido de la norma. Así lo declaro.

En relación con la multa del art. 2 de la mencionada Ley, es aplicable al presente caso la doctrina legal sentada por la Excm. Corte Suprema de Justicia de Tucumán en los autos “*Barcellona, Eduardo José vs. Textil Doss SRL s cobro de pesos*” sentencia n° 335 de fecha 12/05/2010, que sostuvo como requisito necesario para la procedencia de esta indemnización que el art. 2 de la Ley 25323 exige que el trabajador curse una intimación fehaciente al empleador moroso a los efectos de otorgarle una última oportunidad para que éste adecue su conducta a las disposiciones legales. De esta manera, habiendo intimado el actor al pago de

la multa de referencia de forma fehaciente y en tiempo oportuno (TCL 17/06/2020), el rubro reclamado puede prosperar. Así lo declaro.

5. Art. 80 LCT: Nuestra Corte sostuvo: “... *resulta ineficaz el requerimiento cursado con anterioridad al vencimiento del plazo de 30 días otorgado al empleador para la entrega del certificado, pues la norma reglamentaria es clara en cuanto a que recién luego de transcurrido este término, el trabajador queda habilitado a remitir la intimación...*”

De conformidad con TCL del 17/06/2020, la actora intima fehacientemente a su empleadora a hacer entrega de la documentación referida en el art. 80 LCT, sin que hasta el momento se verifique su entrega o efectiva puesta a disposición, por lo que resulta aplicable la multa allí dispuesta. Así lo declaro.

Se condena a la demandada asimismo, a confeccionar una nueva certificación en la que consten las condiciones laborales declaradas en esta sentencia, en el perentorio término de 10 días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias por su incumplimiento. Así lo declaro.

6. Diferencias salariales por los periodos de mayo 2018 a abril 2020: Atento a las condiciones laborales declaradas en la segunda cuestión, en relación con la jornada completa, categoría y antigüedad real de la actora, las diferencias salariales reclamadas deben prosperar. Atento ello, el cálculo deberá realizarse conforme la escala salarial vigente por cada periodo, de acuerdo a aquellas condiciones y respecto de los montos denunciados en la planilla de demanda efectuada por la actora, atento que el demandado no impugnó ésta, ni acreditó el pago de los salarios por prueba alguna. Así lo declaro.

7. DNU 34/2019: Reclama la trabajadora la doble indemnización prevista en el decreto 34/2019. Al haber operado el despido directo en 14/05/2020, la misma se encontraba aun dentro del período de vigencia previsto en el decreto que declaró la emergencia en materia ocupacional, dictado en 13/12/2019 y con vigencia desde el mismo día. Por lo tanto, considero que la norma mencionada es aplicable al despido de Pacheco, por lo que corresponde admitir el rubro pretendido. Así lo declaro.

Intereses: Atento a la doctrina fijada por la SCJT, en autos “Olivares, Roberto Domingo vs. Michavila, Carlos Arnaldo s/ Daños y Perjuicios”, sentencia N° 937/2014, del 23/09/2014, en la que se establece que el procedimiento para el cálculo de los intereses constituye

una cuestión propia de la prudente valoración de los jueces, dejando sin efecto el estatus de doctrina legal establecido por el mismo Tribunal en el caso “Galletini Francisco vs. Empresa Gutiérrez SRL s. Indemnizaciones”, sentencia N° 443, del 15/06/2004, propongo la aplicación al caso de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina, desde que cada suma es debida hasta su efectivo pago.

Ello por entender que dicha tasa es la que corresponde a las circunstancias socio económico actual, tal como lo han entendido numerosos tribunales en todo el país. Así, por caso, las Cámaras Nacionales del Trabajo, mediante acta N° 2357/2002, del 7 de mayo de 2002, en la que se dispuso su vigencia a partir del 6 de enero de 2002, y el plenario “Samudio de Martínez c/ Transportes 260 SA s/ daños y perjuicios”, del 20/04/2009, de las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil.

En efecto, y tal como lo expresó la Suprema Corte de Justicia de Mendoza: *“Una tasa -como la pasiva-, que se encuentra por debajo de los índices inflacionarios, no sólo no repara al acreedor sino que beneficia al deudor que dilata el pago de la deuda. Es por ello, que la tasa de interés debe cumplir, además, una función moralizadora evitando que el deudor se vea premiado o compensado con una tasa mínima, porque implica un premio indebido a una conducta socialmente reprochable. Al tratarse de deudas reclamadas judicialmente debe existir un plus por mínimo que sea que desaliente el aumento de la litigiosidad (‘Amaya, Osvaldo D. c/Boglioli, Mario’ del 12/9/05; LL Gran Cuyo, 2005 -octubre-, 911-TySS2005, 747-IMP2005-B, 2809)”*.

La tasa pasiva del BCRA no cumple con los fines y propósitos resarcitorios de los intereses ya que no representa fielmente el incremento de las remuneraciones, determinando, como consecuencia, que el acreedor laboral (que es un sujeto de preferente tutela constitucional -art. 14 bis CN- y en los tratados sobre derechos humanos -art. 75.22 CN-) vea menguado su crédito, con claro conculcamiento de las garantías de igualdad ante la ley (art. 16 CN); de propiedad (art. 17 CN) y de indemnidad (art. 19). Por otra parte, el “*quantum*” de la tasa pasiva, que se venía aplicando hasta ahora en los tribunales locales, no sólo no logra realizar la justicia del caso sino que, como resultado, premia el incumplimiento como conducta social (Drucaroff Aguiar, Alejandro, “La modificación del plenario Uzal. Una cuestión esencial no resuelta”, La Ley, 4/9/03).

Por lo demás, la aplicación de la tasa activa no es incompatible con la prohibición de indexar establecida por las Leyes 23928 y 25561, ya que no debe interpretarse que la tasa de interés deba divorciarse de la realidad, ni de los principios constitucionales de justicia, equidad, protección al trabajo y propiedad, a los que debe subordinarse, puesto que una ley jamás puede prevalecer sobre la Carta Magna.

Por ello, se dispone aplicar al caso la tasa de interés precedentemente referenciada. Así lo considero.

Planilla de Rubros e Intereses

Ingreso 01/09/2017
Egreso 14/05/2020
Antigüedad 2 años, 8 meses y 13 días

CCT: 130/75
Categoría: Cajera B

Remuneración al distracto

Básico		\$ 36.705,32
Antigüedad	1% x año	\$ 734,11
Presentismo	8,33%	\$ 3.119,95
Total		\$ 40.559,38

<u>1) Indemnización por antigüedad</u>	
\$ 40.559,38 x 3 años	\$ 121.678,14
<u>2) Indemnización Sustitutiva de Preaviso</u>	
\$ 40.559,38 x 1 mes	\$ 40.559,38
<u>3) SAC s/ Preaviso</u>	
\$ 40.559,38 / 12	\$ 3.379,95
<u>4) Integración Mes de Despido</u>	
\$ 40.559,38 / 30 x 16	\$ 21.631,67
<u>5) SAC Proporcional 1er semestre 2020</u>	
\$ 40.559,38 /360 x 134	\$ 15.097,10
<u>6) Haber prop. mes de mayo 2020</u>	
\$ 40.559,38 / 30 x 14	\$ 18.927,71
<u>7) Vacaciones proporcionales 2020</u>	
\$ 40.559,38 / 25 x 134/360 x 14	\$ 8.454,38
<u>8) Art. 1 Ley 25.323</u>	
\$ 40.559,38 x 3 años	\$ 121.678,14
<u>9) Art. 2 Ley 25.323</u>	
(\$121.678,14+ \$40,559,38 + \$21.631,67) x 50%	\$ 91.934,59

<u>10) DNU</u>	
<u>34/19</u>	
1) Indemnización por antigüedad	\$ 121.678,14
2) Indemnización Sustitutiva de Preaviso	\$ 40.559,38
3) Integración Mes de Despido	\$ 21.631,67
	\$ 183.869,18
	\$ 183.869,18

Total rubros 1 a 10		\$ 627.210,23
Interés tasa activa BNA desde 20/05/20 al 31/01/23	133,37%	\$ 836.512,79
Total rubros 1 a 10 en \$ al 31/01/2023		\$ 1.463.723,02

11) Art. 80 LCT		
\$ 40.559,38 x 3		\$ 121.678,14
Interés tasa activa BNA desde 19/06/20 al 31/01/23	130,74%	\$ 159.081,99
Total rubro 11 en \$ al 31/01/2023		\$ 280.760,13

12) Diferencias Salariales desde mayo 2018 a abril 2020.

Remunerac.	may 18 a jul 18	ago-18	sep-18	oct 18 a dic 18	ene-19
Básico	\$ 21.248,99	\$ 22.214,85	\$ 22.214,85	\$ 24.146,58	\$ 25.498,79
Antigüedad			\$ 222,15	\$ 241,47	\$ 254,99
Presentismo	\$ 1.770,75	\$ 1.851,24	\$ 1.869,75	\$ 2.032,34	\$ 2.146,15
	\$ 23.019,74	\$ 24.066,09	\$ 24.306,75	\$ 26.420,38	\$ 27.899,93

Remunerac.	feb-19	mar 19 a ago 19	sep 19 a oct 19	nov 19 a dic 19	ene 20 a feb 20
Básico	\$ 26.851,00	\$ 28.010,04	\$ 32.010,60	\$ 33.271,05	\$ 34.531,50
Antigüedad	\$ 268,51	\$ 280,10	\$ 640,21	\$ 665,42	\$ 690,63
Presentismo	\$ 2.259,96	\$ 2.357,51	\$ 2.720,90	\$ 2.828,04	\$ 2.935,18
	\$ 29.379,47	\$ 30.647,65	\$ 35.371,71	\$ 36.764,51	\$ 38.157,31

Remunerac.	mar-20	abr-20
Básico	\$ 35.791,95	\$ 36.705,32
Antigüedad	\$ 715,84	\$ 734,11
Presentismo	\$ 3.042,32	\$ 3.119,95
	\$ 39.550,10	\$ 40.559,38

Período	Debió Percibir	Percibió	Diferencia	% Tasa activa BNA al 31/01/23	Intereses al 31/01/23
may-18	\$ 23.019,74	\$ 10.434,78	\$ 12.584,96	235,01%	\$ 29.576,12
jun-18	\$ 23.019,74	\$ 10.434,78	\$ 12.584,96	232,28%	\$ 29.232,55
1er SAC 18	\$ 11.509,87	\$ 5.217,39	\$ 6.292,48	232,28%	\$ 14.616,28
jul-18	\$ 23.019,74	\$ 10.434,78	\$ 12.584,96	229,21%	\$ 28.846,20
ago-18	\$ 24.066,09	\$ 12.288,32	\$ 11.777,77	225,91%	\$ 26.607,66
sep-18	\$ 24.306,75	\$ 12.288,32	\$ 12.018,43	222,02%	\$ 26.683,11
oct-18	\$ 26.420,38	\$ 13.356,87	\$ 13.063,51	217,26%	\$ 28.381,90
nov-18	\$ 26.420,38	\$ 13.356,87	\$ 13.063,51	211,07%	\$ 27.573,03
dic-18	\$ 26.420,38	\$ 13.356,87	\$ 13.063,51	205,79%	\$ 26.883,00
2do SAC 18	\$ 13.210,19	\$ 6.678,44	\$ 6.531,75	205,79%	\$ 13.441,49
ene-19	\$ 27.899,93	\$ 14.105,28	\$ 13.794,65	201,02%	\$ 27.729,33
feb-19	\$ 29.379,47	\$ 14.852,83	\$ 14.526,64	197,35%	\$ 28.668,70
mar-19	\$ 30.647,65	\$ 15.493,96	\$ 15.153,69	193,35%	\$ 29.299,93
abr-19	\$ 30.647,65	\$ 15.493,96	\$ 15.153,69	188,72%	\$ 28.598,70
may-19	\$ 30.647,65	\$ 15.494,44	\$ 15.153,21	183,46%	\$ 27.800,62
jun-19	\$ 30.647,65	\$ 15.649,39	\$ 14.998,26	178,31%	\$ 26.743,60
1er SAC 19	\$ 15.323,83	\$ 7.824,70	\$ 7.499,13	178,31%	\$ 13.371,79
jul-19	\$ 30.647,65	\$ 15.649,39	\$ 14.998,26	173,41%	\$ 26.007,80
ago-19	\$ 30.647,65	\$ 15.649,39	\$ 14.998,26	168,02%	\$ 25.199,84
sep-19	\$ 35.371,71	\$ 18.003,75	\$ 17.367,96	162,14%	\$ 28.160,11
oct-19	\$ 35.371,71	\$ 17.884,53	\$ 17.487,18	156,29%	\$ 27.330,57

nov-19	\$	36.764,51	\$	18.588,75	\$	18.175,76	151,55%	\$	27.545,95
dic-19	\$	36.764,51	\$	18.588,75	\$	18.175,76	147,17%	\$	26.749,49
2do SAC 19	\$	18.382,26	\$	9.294,38	\$	9.087,88	147,17%	\$	13.374,74
ene-20	\$	38.157,31	\$	19.292,99	\$	18.864,32	143,30%	\$	27.033,06
feb-20	\$	38.157,31	\$	19.292,99	\$	18.864,32	140,03%	\$	26.416,56
mar-20	\$	39.550,10	\$	19.997,20	\$	19.552,90	136,93%	\$	26.774,03
abr-20	\$	40.559,38	\$	-	\$	40.559,38	134,60%	\$	54.592,45
									\$ 743.238,61

Total de diferencias salariales	\$	417.977,09
Total de intereses	\$	27.033,06
Total rubro 12 en \$ al 31/01/2023	\$	445.010,15

Resumen de condena

Total rubros 1 a 10 en \$ al 31/01/2023	\$	1.463.723,02
Total rubro 11 en \$ al 31/01/2023	\$	280.760,13
Total rubro 12 en \$ al 31/01/2023	\$	445.010,15
Total condena en \$ al 31/01/2023	\$	2.189.493,31

Demanda prospera por:	$\frac{\text{Capital rubros que prosperan}}{\text{Capital demanda}} \times 100$	93,76%
-----------------------	---	--------

Actualización de demanda (para regulación de honorarios)

Total demanda	\$	1.244.573,30
Tasa activa BNA desde 06/07/20 al 31/01/23	129,08%	\$ 1.606.516,37
Total demanda actualizada en \$ al 31/03/2023		\$ 2.851.089,67

Costas: de acuerdo al resultado arribado, y resultando ínfimos los rubros rechazados respecto de los que sí prosperan, corresponde imponer las costas en su totalidad a la demandada Lescano vencida (art. 63 CPCYC).

Respecto de las generadas por el codemandado Carmena, corresponde imponerlas a la actora vencida, por ser ley expresa (cfr. art. 61 CPCYC de aplicación supletoria). Así lo declaro.

Honorarios: Con respecto a la demanda contra Alicia del Valle Lescano: Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa conforme lo prescribe el art. 46 inc. “2” de la Ley 6204.

Atento al resultado arribado en la causa y a la naturaleza de la misma, es de aplicación el artículo 50 inc a) de la citada Ley, por lo que corresponde tomar como base de regulación el monto de condena al 31/01/2023, que asciende a la suma de \$2.189.493,31

Teniendo presente la base regulatoria, la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los

artículos 14, 38, 42, 59 y concordantes de la Ley 5480 y 50 del CPL, con los topes y demás pautas impuestas por la Ley 24432 ratificada por la Ley provincial 6715, se regulan los siguientes honorarios:

1) Al letrado César Eduardo Luna González (MP n° 8259) por su actuación en el doble carácter por el actor en las tres etapas del proceso de conocimiento, el 14% de la base de regulación con más el 55%, equivalente a la suma de \$ 475.120,05 (pesos cuatrocientos setenta y cinco mil ciento veinte con 05/100).

Con respecto a la demanda contra Marcelo Ramón Carmena: Atento al resultado arribado en la causa y a la naturaleza de la misma, es de aplicación el artículo 50 inc. 2) de la citada ley, por lo que se toma como base regulatoria el 40% del monto de la demanda actualizada al 31/01/2023, que resulta la suma de \$1.140.435,87.

Teniendo presente la base regulatoria, la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los artículos 14, 38, 42, 59 y concordantes de la Ley 5.480 y 50 del C.P.L. Con los topes y demás pautas impuestas por la ley 24.432 ratificada por la Ley provincial 6.715, se regulan los siguientes honorarios:

2) Al letrado Sebastián Giudice (MP n° 8906) por su actuación en el doble carácter por el demandado Marcelo Ramón Carmena en las tres etapas del proceso, el 14% de la base de regulación con más el 55%, equivalente a la suma de \$247.747,58 (pesos doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y cuatro con 58/100).

3) Al CPN Roberto Alfredo Merlo, por su labor pericial en autos, el 3% de la base de regulación, equivalente a la suma de \$34.213,08 (pesos treinta y cuatro mil doscientos trece con 08/100).

Por ello,

RESUELVO

I- HACER LUGAR a la excepción de falta de acción deducida por el demandado Marcelo Ramón Carmena, en consecuencia **RECHAZAR la demanda** interpuesta por la Sra. Macarena Belén Pacheco Barros, DNI N° 40.434.750, con domicilio en Pje. Álvarez Thomas n° 2353, de esta ciudad en su contra, por lo considerado.

II- HACER LUGAR PARCIALMENTE a la demanda promovida por Macarena Belén Pacheco Barros, DNI N° 40.434.750, con domicilio en Pje. Álvarez Thomas n° 2353, de esta ciudad, en contra de Alicia del Valle Lescano, DNI n° 24.987.050, con domicilio en calle Laprida n° 213, de esta ciudad. En consecuencia, **se condena a esta al**

pago en el perentorio plazo de **CINCO DIAS** de la suma de pesos **\$2.189.493,31 (peso dos millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y tres con 31/100)** por los rubros de indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva por preaviso, Integración mes de despido, proporcional de mayo 2020, vacaciones, SAC proporcional, SAC s/ preaviso, Multa del art. 1 y 2 Ley 25323, Art. 80 LCT, DNU 34/2019, diferencias salariales por los periodos de mayo 2018 a abril 2020.

Se condena a la demandada, asimismo, a confeccionar una nueva certificación en la que consten las condiciones laborales declaradas en esta sentencia, en el perentorio término de 10 días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias por su incumplimiento. S e absuelve ala demandada al pago de los rubros rechazados.

III- COSTAS, conforme a lo considerado.

IV- HONORARIOS: 1) Al letrado **César Eduardo Luna González** (MP nº 8259) la suma de \$475.120,05 (pesos cuatrocientos setenta y cinco mil ciento veinte con 05/100). 2) Al letrado **Sebastián Giudice** (MP nº 8906) la suma de \$247.747,58 (pesos doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y cuatro con 58/100). 3) Al CPN **Roberto Alfredo Merlo**, la suma de \$34.213,08 (pesos treinta y cuatro mil doscientos trece con 08/100).

V- PLANILLA FISCAL: oportunamente practicar y hacer reponer (Art. 13 Ley 6204).

VI- COMUNICAR a la Caja Previsional de Abogados y Procuradores de Tucumán.

REGISTRAR, ARCHIVAR Y HACER SABER 498/20.KGE

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=KUTTER Guillermo Ernesto, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20218946829, Fecha:22/02/2023;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>